

Socialismo Hoy

Publicación del Partido de los Trabajadores, Sección oficial para Costa Rica de la Liga Internacional de Trabajadores - Cuarta Internacional (LIT-CI)

Junio 2021 - N°118 Año XIV - Precio solidario



**¡CÁRCEL Y EXPROPIACIÓN A
LOS DUEÑOS DE LAS
GRANDES CONSTRUCTORAS!**

Junio 2021 | Año XIV N°118

Contenidos

Nacionales

¡Cárcel y expropiación a los dueños de las grandes constructoras!

Nacionales

Ante la emergencia del desempleo: ¡reducción de la jornada de trabajo sin reducir los salarios!

Elecciones 2022

Nada que celebrar en la convención del PLN

Zona Norte

Los Chiles: Fiscalía busca criminalizar a más de 50 personas por lucha campesina

Covid-19

Comparecencia de Salas muestra sumisión del país al acaparamiento imperialista de las vacunas

Nacionales

Libertad para Mario Cerdas: ¡por la legalización de la marihuana!

Nacionales

¡Contra la reforma al IVM!

Nacionales

Privatización de la salud: Caja plantea pago a hospitales privados durante emergencia sanitaria

Nacionales

Retraso en obras de ruta 32 muestra fracaso de concesión de obra pública

Juventud

Ante la negociación del FEES 2022: ¡Urge lucha y organización en las U públicas!

Internacionales

¡Repudio a la visita de Blinken! Alto al saqueo imperialista, al acaparamiento de vacunas y la masacre al pueblo palestino

Internacionales

Nicaragua: ¿Es posible quitar a Ortega mediante elecciones?

Nacionales

¡Cárcel y expropiación a los dueños de las grandes constructoras!



La mañana de este lunes 14 de junio inició con un operativo policial que acaparó portadas en los principales medios de comunicación. En simultáneo se desarrollaron 57 allanamientos en las principales empresas constructoras del país, a funcionarios de gobierno, Casa Presidencial y más de 30 arrestos. Todo esto se dio como parte de las investigaciones iniciadas en 2019 contra las más grandes empresas constructoras del país, las cuáles, durante décadas, se han visto beneficiadas con contratos para desarrollar infraestructura estatal.

La construcción de obra pública en manos privadas es profundamente corrupta

Por años se han diseñado mecanismos legales que permiten trasladar recursos públicos a empresas privadas que desarrollan trabajos caros y de mala calidad. Es así como se ha favorecido a grandes compañías privadas como H. Solís y Constructora Meco, las cuales mantienen contratos por 794 millones de dólares en los últimos dos años y han controlado el 90% de las licitaciones de conservación vial.

Desde el Partido de los Trabajadores hemos denunciado que la contratación privada para la construcción o administración de obras públicas es profundamente corrupta, que dichos mecanismos existen solo para favorecer a grandes intereses empresariales y que son una de las principales fuentes de saqueo de los recursos públicos. Las investigaciones recientes confirman esa realidad y fortalecen nuestro llamado a acabar con los mecanismos de concesión o contratación privada.

El problema no es de unos cuántos funcionarios o empresarios deshonestos, como quieren hacer ver algunos políticos. Se trata de un modelo privatizador y corrupto, diseñado para que el único resultado posible sea el saqueo de las finanzas públicas y la acumulación de inmensas fortunas privadas a partir de las rentas del Estado.

Por eso es que planteamos que debe acabarse ese modelo entreguista que ha desmantelado instituciones como el MOPT para dar paso a oficinas como el CONAVI que solo sirven para trasladar dineros públicos a negocios privados. Estos actos de corrupción demuestran una vez más la necesidad de devolver al control estatal las funciones de construir obra pública y de garantizar una fiscalización por parte de las organizaciones populares y las comunidades de toda la obra pública que se construya. De esta manera podríamos tener obra pública de mayor calidad, de menos costo, que genere más oportunidades de empleo y que acabe con el negocio que tienen montado unas cuantas grandes empresas.

Una historial de impunidad para los grandes ricos

Si bien nos alegra que estos hechos salgan a la opinión pública, no tenemos ninguna confianza en que al final haya condenas contra los grandes capitalistas detrás de estos negocios. Al día siguiente de los allanamientos (15 de julio) se dio a conocer que Federico Campos, esposo de la Fiscal General Emilia Navas, es abogado defensor de empresas involucradas en este escándalo. Con tales vínculos los ricos y poderosos se aseguran un asiento en los principales poderes de la República y el favor de las leyes y la justicia que solo se ensañan contra los pobres.

En el país se han destapado en el pasado grandes escándalos de corrupción que no terminan en nada y que forman parte de ese largo historial de impunidad. Podemos mencionar solo como ejemplos el caso Caja-Fischel y el crédito finlandés que terminó sin condenas para los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón; el Cementazo, en el cual no se involucró a altos cargos de Casa Presidencial y por el cual nadie descuenta prisión a la fecha; y la doble contabilidad de Yamber para estafar a la banca nacional sin que ningún miembro de la familia Yankelewitz haya descontado prisión. Todos estos hechos tienen como elementos en común que involucran a familias poderosas del país y que han quedado con el favor del Poder Judicial.

Esta justicia es la de los ricos, en ella solamente van a descontar prisión los pobres que roban por hambre o trafican por necesidad, pero nunca la clase política ni los grandes empresarios. Para empezar a hablar de justicia tenemos que exigir prisión para los dueños de Meco, H.Solís y demás constructoras, la expropiación de todos los bienes de esas empresas y la nacionalización inmediata de toda la obra pública.

Un gobierno corrupto al servicio de los grandes empresarios

El gobierno de Carlos Alvarado ha sido duramente cuestionado por actos de corrupción y favorecimiento de importantes grupos empresariales. Durante estos años ha reproducido los mismos métodos de partidos tradicionales como el PLN o el PUSC. Las denuncias más recientes involucran a su más cercano asesor y pieza clave de Casa Presidencial, Camilo Saldarriaga.

Ya se han dado otras importantes denuncias contra figuras como la coordinadora de su equipo económico Edna Camacho por sus vínculos con las estafas de Aldesa a cargo de su esposo Javier Chaves o más recientemente el ministro del sector privado André Garnier por no pago de impuestos o favorecimiento de negocios de la Agencia Empresarial para el desarrollo.

Esos y muchos otros ejemplos reflejan para quién se gobierna en realidad. Junto con los dueños de las grandes empresas también deben pagar los altos cargos de gobierno y jerarcas de distintas dependencias públicas que son parte del entramado de corrupción.

El gobierno y la Asamblea no tienen autoridad moral para seguir atacando a los trabajadores

En el mismo momento en que se destapan estos escándalos está por aprobarse el proyecto de Ley de Empleo Público, defendido por el gobierno, la Asamblea y los grandes ricos que nos roban. Ese parlamento donde se pasean los narcos, donde se votan leyes para enriquecer a los grandes empresarios y donde se eligen magistrados para permitir la impunidad de los ricos no tiene autoridad para votar recortes salariales o exigir sacrificios a los trabajadores estatales.

Las finanzas públicas no están en crisis porque se garanticen derechos justos a los empleados estatales, tampoco se arregla la crisis fiscal atacando su salario. Las causas de la crisis están en el robo de nuestros recursos y en una costosa deuda pública tan corrupta como las concesiones a empresas constructoras privadas.

Trabajadores públicos y privados debemos exigir que esta crisis la paguen los grandes ricos que nos han robado y la clase política que nos gobierna. Todos ellos deberían ir presos si queremos empezar a hablar de justicia y eficiencia.

¡Cárcel y expropiación de los bienes de las grandes empresas que nos han robado!

¡Derogación inmediata de todos los mecanismos de concesión o contratación privada de obras públicas!

¡Nacionalización sin indemnización de todos los proyectos de obra pública bajo fiscalización de las comunidades y organizaciones populares!

¡Rechacemos la ley de empleo público! ¡Que la crisis fiscal la paguen los ricos que nos han robado!

Nacionales

Ante la emergencia del desempleo: ¡reducción de la jornada de trabajo sin reducir los salarios!



A inicios de junio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó la última encuesta de empleo, donde, como era de esperar, los datos siguen reflejando que estamos ante una emergencia de desempleo.

Para abril, el nivel de desempleo se ubicó en un 17.3%. La peor parte la llevan las mujeres, quienes durante la pandemia fueron las primeras en ser despedidas y están siendo las últimas en ser contratadas, con un nivel de desempleo en 23.8%. Esto significa que hay 421 mil personas que están buscando trabajo y no encuentran. Eso implica cientos de miles de hogares que no tienen cómo llevar el sustento, pagar el alquiler o los servicios.

Con la pandemia, la política del gobierno y de todos los partidos en la Asamblea Legislativa (TODOS, incluido el Frente Amplio), fue la de pasar los costos de la pandemia a los trabajadores. Esto se manifestó con toda claridad con la aprobación de la suspensión de contratos y de reducción de la jornada.

Pero la pandemia no solo ha traído más desempleo, sino que además ha empeorado las condiciones de trabajo. Por ejemplo, según la última encuesta del INEC, 1 de cada 3 trabajadores no cuenta con seguro en su trabajo, y alrededor del 40% de quienes tienen trabajo en este momento, es un trabajo informal.

Desde el Partido de los Trabajadores hemos venido diciendo que la única forma de garantizar empleo para todos es si el total del trabajo disponible se reparte entre toda la clase trabajadora. Esto significa reducir la jornada de trabajo, pero eso sí, sin reducir el salario.

Por ejemplo, en el sector manufactura y construcción trabajan actualmente alrededor de 319,000 personas. Si estas personas trabajaran 6 horas en lugar de 8 horas por día, generaría automáticamente 106,000 empleos. En realidad, serían más empleos, porque lo normal en construcción es trabajar 12 horas por día de lunes a sábado. En el sector manufactura es similar, por ejemplo, la Panasonic tiene más de un año y medio de tener a sus empleados trabajando 12 horas por día 6 días a la semana.

Sin embargo, no bastaría para la clase trabajadora la reducción de la jornada, y acabar con las horas extra, porque esto implicaría una reducción de los ingresos, es necesario que esta medida sea acompañada de un aumento significativo en el salario.

Cuando planteamos estas medidas, muchos pequeños empresarios se escandalizan, e incluso muchos trabajadores piensan que esto no sería posible, que los empresarios no pueden sobrevivir así. En primer lugar aclaramos que estas medidas deben ir dirigidas para los grandes empresarios. El pequeño empresario más bien necesita de apoyo, porque con la pandemia es el otro sector que la ha tocado pagar la crisis.

Los ingresos de los grandes empresarios son absurdamente grandes, y ellos se enriquecen a costa del sudor de la clase trabajadora. Para que tengamos una idea, veamos los ingresos de las empresas de los 3 empresarios más ricos del país. De acuerdo con la revista Forbes, Cervecería de Costa Rica, Grupo Nación (ambas de Rodolfo Jiménez Borbón), Constructora Meco (Carlos Cerdas Araya) y Britt (Steve Aronson) sumaron 1.3 millones de millones de colones en 2019. En comparación, estos tres empresarios tuvieron ingresos 44% mayores que todos los ingresos de las 370 mil familias más pobres de Costa Rica. En otras palabras, tres hombres concentraron más riqueza que la que tienen 1.5 millones de personas en el país [1].

La reducción de la jornada de trabajo busca sencillamente obligar a esos grandes empresarios a reducir la jornada de sus trabajadores sin reducirles el salario, y contratar a más personas. Esto llevaría a una reducción de la pobreza, eso sí a costa de las ganancias de esos grandes capitalistas.

Ningún otro partido va a querer implementar esta medida, porque todos ellos responden a los intereses de esos grandes empresarios. La única forma en que esto se puede concretar es mediante un gobierno de los trabajadores.

Referencias

[1] Así son los tres empresarios ticos más ricos de Centroamérica, según Forbes. En Semanario Universidad, 21 abr 2020.

Datos adicionales obtenidos de la de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Elecciones 2022

Nada que celebrar en la convención del PLN



Por: Jhonn Vega

El pasado domingo 6 de junio se realizó la convención interna del Partido Liberación Nacional para elegir a su candidato presidencial y conformar sus estructuras distritales. De acuerdo con los datos del propio partido participaron cerca de 400 mil personas, resultando ganador el expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998) con 150 mil votos aproximadamente (36,9% de los votos emitidos).

Figueres y el propio partido celebraron la convención como una victoria contundente, no obstante, el proceso mismo está lejos de superar la crisis que arrastra dicho partido y que mantiene cuesta arriba las posibilidades de ganar la próxima carrera presidencial. El porcentaje de votación obtenido por Figueres fue el más bajo en la historia de un candidato presidencial de ese partido y sus votos no representan ni el 4% del padrón electoral nacional, su propia elección abre una gran incertidumbre sobre las posibilidades del PLN de ser gobierno nuevamente.

Una falsa campaña “democrática” para votar en la convención

Es importante señalar que los grandes medios de comunicación orquestaron una gran campaña para llamar a participar de la convención interna, insistiendo en un supuesto deber democrático y un falso fervor cívico. Nosotros, a diferencia de esas posiciones no creemos que votar en la convención de dicho partido tuviese nada que ver con un deber ciudadano o con una afirmación de la democracia; llamar a votar en dicha convención significaba dar respaldo político a uno de los grandes responsables de los graves problemas que vive el país, el llamado a votar en las internas no era más que un intento descarado por fortalecer a un partido corrupto y enemigo del pueblo.

Esta campaña de los grandes medios estuvo atravesada por un esfuerzo de polarizar la elección entre el “figuerismo” y el voto “antifigueres”, con lo cual se pretendía aumentar la participación de votantes en las internas en medio de la incertidumbre por la pandemia. Los debates de los grandes medios, toda la cobertura de sus candidatos y del proceso mismo sumó batallas con todo por mantener una alta votación que pese a ellos no termina por resolver la crisis y la encubre con unos resultados a penas por debajo de los 431 mil votos de la convención interna del 2017.

La principal fortaleza se mantiene en las estructuras distritales de un partido en crisis

Con cinco candidaturas disputando la votación, con un candidato muy cuestionado encabezando las encuestas y que finalmente resultó vencedor en la elección interna, las principales fuerzas de arrastre electoral fueron los miles de estructuras distritales que aún se organizan en torno al partido. Según datos de Tribunal Interno para la convención se inscribieron 1707 papeletas distritales y un total de 19900 candidaturas (entre distritales y de otros movimientos); es decir, con 20 personas que hayan llevado a votar cada uno de esos candidatos se sacaban los 400 mil votos totales de la convención.

Ese arrastre distrital sigue siendo un tanque de oxígeno para un partido en crisis. Lamentablemente, pese a la ruptura con el PLN en las dos últimas votaciones nacionales no hay una ruptura con esas estructuras clientelares que aún subsistente en cada distrito del país y que aún mantienen con vida al partido.

Esas fuerzas distritales que son determinantes en las elecciones internas y en los procesos electorales municipales eso sí han ido perdiendo fuerza como caudal electoral en las elecciones presidenciales al realizarles estas por separado de la elección de Alcaldes, Regidores y síndicos de cada cantón. Este ha sido un problema en las dos últimas elecciones presidenciales del PLN donde sus candidatos no necesariamente mueven o reflejan los intereses locales de cada cantón ni son capaces de arrastrar esa maquinaria electoral para garantizar una elección presidencial.

EL PLN sigue siendo un partido corrupto hasta la médula

En estas elecciones intentaron presentar un nuevo PLN, nada más falso y descarado. Este es el mismo viejo partido de los escándalos de corrupción, de los alcaldes denunciados por diversos delitos, de los líderes vinculados al narcotráfico, el mismo que en los últimos treinta años se ha encargado de vender el país al mejor postor (ruta 27, crucitas, APM, TLC, entre otros).

El candidato que resultó electo refleja la esencia corrupta y desprestigiada de ese partido, del cual no podemos esperar nada más que nuevos ataques al pueblo y asaltos a los bienes públicos; al igual que hubiese sido con cualquiera de los cinco que resultara electo. Figueres la misma noche de su triunfo en las internas dejó claro que su absoluta prioridad es el acuerdo con el FMI y todos los ataques que dicho acuerdo representa.

Durante toda la campaña los precandidatos fueron incapaces de plantear salidas reales a los graves problemas de desempleo y miseria que viven amplios sectores de la población; sus propuestas estaban pensadas para congraciarse con los grandes ricos del país, con las cámaras empresariales y con las grandes empresas transnacionales. Por eso no había un candidato menos malo y tampoco hay nada que celebrar en la elección de Figueres.

Por una alternativa socialista ante la decadencia capitalista

En el país se vive una crisis en los aparatos de los grandes partidos políticos de los ricos como el PLN. De esos partidos solo deseamos que en el futuro cercano no quede piedra sobre piedra, que se hundan en su propia podredumbre y corrupción, y que sean superados por la fuerza del pueblo movilizado como ocurre en Chile o Colombia.

También se vive una profunda crisis económica frente a la cual es necesario levantar una alternativa socialista y de la clase trabajadora. De ningún partido como el PLN podemos esperar una solución real para la clase trabajadora, tampoco podemos confiar en que el voto o la elección de tal o cual candidato nos va a deparar un mejor futuro.

Es necesario denunciar el carácter corrupto de esos partidos, los intereses mezquinos que defienden y la gran miseria que le han traído al pueblo trabajador. Para oponernos a ellos es que construimos la opción socialista del PT y desde la cual insistimos: ¡no vote por los partidos de los ricos, organícese y luche junto al Partido de los Trabajadores!

Zona Norte

Los Chiles: Fiscalía busca criminalizar a más de 50 personas por lucha campesina



Desde mediados de 2019 unos 7 procesos de lucha campesina se han desarrollado en el cantón de Los Chiles, procesos que han movilizado a centenares de familias sin tierra que buscan un lugar donde vivir y trabajar en medio de la enorme crisis económica que vive el país.

En los procesos desarrollados en comunidades como El Parque, Las Nubes, Cristo Rey y Monte Alegre, las ocupaciones se dan en terrenos pertenecientes al Bancos Estatales o terratenientes extranjeros, que en la mayoría de ocasiones se han mantenido sin producir por varios años.

Como parte de esos proceso las coordinaciones campesinas construyeron la Alianza Campesina del Norte a finales del año anterior, como un espacio de coordinación de las denuncias y exigencias del movimiento, que moviliza a mas de 800 familias y se distribuye por varios miles de hectáreas de terreno ocupado.

La respuesta del gobierno ha sido la represión

Desgraciadamente el gobierno de Carlos Alvarado lejos de buscar solucionar el creciente problema de la tenencia de la tierra en el Cantón de Los Chiles, se ha puesto en la primera línea de la defensa de los intereses de los grandes poseedores de tierra, en los últimos dos años instituciones como el INDER y el Ministerio de Vivienda no han sido quienes visitan las ocupaciones de tierra, si no más bien centenares de antimotines y agentes de la DIS que buscan reprimir a quienes se han atrevido a reclamar una vida mejor.

Por si eso fuera poco, la cámaras de ganaderos y piñeros la Municipalidad han presionado a la Fiscalía de Los Chiles para que persiga a las y los sin tierra, lo que en este momento tiene a una enorme cantidad de personas siendo procesadas e investigadas de diversos delitos como usurpación, amenazas, estafa procesal e instigación, ese ultimo delito con especial saña hacia las personas líderes del proceso.

En este momento existen por lo menos 55 personas que están perseguidas, donde llama la atención la saña particular con la fiscalía busca criminalizar a varias de las mujeres que han cumplido papeles protagónicos en el movimiento por tierra.

Lejos de ser procesos de robo de tierras como lo buscan pintar los fiscales y abogados de los terratenientes, son luchas dirigidas a que el gobierno por medio del INDER y sus herramientas legales, compre o expropie esos terrenos y los distribuya entre las familias necesitadas, ya que la acumulación de tierra por parte de los grandes empresarios del agronegocio, los bancos e inversionistas extranjeros ha provocado una situación insostenible para quienes viven en esa región del país.

Urge que el movimiento popular ponga los ojos en el norte y llene de solidaridad a quienes son perseguidos por luchar

En este ultimo gobierno del PAC la lucha popular ha sido particularmente intensa y la respuesta del gobierno ha sido bastante más represiva que en el pasado, en los últimos años de luchas jornadas contra el plan fiscal, la defensa de las universidades o los enfrentamientos callejeros contra los acuerdos con el FMI, dejaron un saldo de centenares de trabajadores, campesinos y estudiantes procesados penalmente, esa dinámica no se ha detenido y más bien avanza.

En esta ocasión la militancia del Partido de los Trabajadores hace un llamado a todas las personas luchadoras del movimiento social, así como a las organizaciones del movimiento popular, a llenar de solidaridad a las personas que hoy están siendo perseguidas en Los Chiles por luchar por tierra y vivienda.

Desgraciadamente en los próximos meses, decenas de personas serán acusadas en la fiscalía de Los Chiles por participar de una forma u otra en los procesos de ocupación de fincas de los últimos años, y la respuesta de todas las personas luchadoras del país debe ser de repudio total y movilización para evitar que sean castigadas por una lucha justa como lo es la lucha por tierra para vivir y trabajar dignamente.

Pero además de la defensa de quienes están siendo perseguidos, urge construir un movimiento de exigencia al gobierno para que atienda y destine recursos para gargarizar el derecho a tierra y vivienda de quienes hoy están en pie de lucha en la zona norte y en otros sectores del país.

Covid-19

Comparecencia de Salas muestra sumisión del país al acaparamiento imperialista de las vacunas



Por: Pabel Bolívar

El ministro de Salud Daniel Salas compareció ante los diputados para referirse al proceso de vacunación contra el COVID-19. En dicho espacio el jerarca dejó entrever que están a merced de las grandes farmacéuticas, por lo cual no podrán acelerar el ritmo en aras de alcanzar la inmunidad de rebaño.

Según su criterio, no se pueden adquirir diferentes tipos de vacunas porque, al darle prioridad a Pfizer y Astra Zéneca, otras compañías como Johnson & Johnson y Moderna tienen comprometida su producción para este año para los países imperialistas.

Por otro lado, expresó su respaldo a los mecanismos contractuales de vacunas como en el caso de la Pfizer, y señaló que no puede dar a conocer la inversión total destinada a esta compañía debido a que existe un acuerdo de confidencialidad. Esto, sin duda, muestra una vez más que quien manda en este campo son las grandes transnacionales que lucran sin importarles las muertes por la pandemia.

Salas defendió a ultranza el manejo del gobierno sobre la pandemia, alegando que debe haber un balance entre la economía y la salud, de ahí que justificara la política de apertura total y se haya limitado a algunas cuantas medidas de restricción del transporte y al llamado a la responsabilidad individual.

Ministro Salas, lacayo al servicio del apartheid de las vacunas

El ministro de Salud y otros funcionarios como el presidente de la Comisión de Emergencias o el de la CCSS gozan de una frecuente exposición pública y de cierta simpatía entre la población. De nuestra parte, como PT, desde el inicio de la pandemia hemos dicho que no debemos depositar ninguna confianza en ellos.

El gobierno de Alvarado mostró una postura complaciente con el gran empresariado de defender sus ganancias por encima de la vida y la salud de la clase trabajadora. Prueba de ello es que las grandes empresas siguieron funcionando y más bien han aumentado sus ganancias, como se vio con muchas de las que se encuentran adscritas al régimen de zonas francas.

Por otro lado, al pueblo le corresponde cargar con los costos de la crisis, tanto sanitaria como económica. No se garantizan las medidas en muchos centros de trabajo, los autobuses públicos van llenos y además la ayuda social del bono proteger resulta insuficiente. Por si esto fuera poco se le dio vía libre a las grandes empresas para realizar despidos y reducciones de salario.

El sector público no la pasa mejor debido a que se congelaron los salarios y las anualidades, entre otras conquistas. Como hemos visto, quienes ponen los muertos son los trabajadores y, gracias a las medidas económicas impulsadas por el gobierno, se dieron cifras récord de desempleo durante la pandemia.

Este 2021 ha estado marcado por un alto pico de contagios y también buena parte de la coyuntura giró en torno al proceso de vacunación. Más allá de que esa comparecencia fuera un show mediático donde los diputados no preguntaron cuestiones clave, el ministro Salas quedó en evidencia ante la clase trabajadora como un funcionario sometido a la política de “apartheid” de vacunas.

Cuando hablamos de apartheid, más allá a la alusión al régimen racista llevado a cabo en Sudáfrica durante el siglo XX, nos referimos a que, en la lógica imperialista, las grandes potencias disponen y acaparan la mayor cantidad de vacunas; son estos gobiernos, en alianza con las grandes farmacéuticas quienes, se apropian de un conocimiento científico público para su beneficio económico.

Estas mismas empresas farmacéuticas han recibido miles de millones de dólares en dinero público para desarrollar la investigación y adueñarse exclusivamente de las patentes, lo que hace que países como Brasil o India no puedan tener vacunas suficientes, pese a tener toda la capacidad de producción.

Justamente esta capacidad productiva, en combinación con el acelerado desarrollo de la ciencia, hubiera garantizado vacunas a toda la población mundial. Sin embargo, se ha dado lo contrario: un apartheid, una segregación, una división entre los países ricos, que tienen todas las vacunas disponibles, y los países pobres, que deben esperar a cuando estas grandes potencias quieran mandar sus migajas. Esta es una lógica criminal, causante de millones de contagios y muertes principalmente en países pobres; el apartheid de las vacunas muestra el genocidio producto de la barbarie capitalista que privilegia ante todo el lucro de las grandes farmacéuticas.

La postura de Salas es de absoluta complicidad con la lógica del apartheid y acaparamiento de vacunas. Él y el gobierno Alvarado se presentan como lo que son, lacayos al servicio de Pfizer, Astra Zéneca y el imperialismo estadounidense. En ningún momento vamos a escucharlos defender la liberación de las patentes, o exigir más vacunas al imperialismo porque sería trascender la voluntad de las mega compañías quienes lucran con jugosos contratos adquiridos en el país.

Mientras tanto, la clase trabajadora sigue expuesta a los contagios, muertes y empobrecida con las políticas económicas de total apertura y fomento a los despidos que benefician al gran capital. Salas, Macaya, Alexander Solís son parte de un gobierno títere, completamente sometido a los dictados de las farmacéuticas y los gobiernos imperialistas en su política de acaparamiento de vacunas. De ninguna manera son aliados del pueblo y no vamos a dejar de denunciar su accionar cómplice con el genocidio capitalista.

Nacionales

Libertad para Mario Cerdas: ¡por la legalización de la marihuana!



El pasado 2 de Junio se ratificó la condena de 8 años al abogado Mario Cerdas, quien es un activista por el autocultivo de cannabis. Esto después de que el abogado fuera condenado a finales de 2020 y su defensa interpusiera apelaciones a la sentencia. El abogado, quien cultivaba marihuana dentro de su casa de habitación es acusado por posesión de plantas, extractos y otros derivados; además de distribución.

En ocasiones anteriores hemos dicho que la ley no se aplica igual para los grandes ricos que para los pobres y los trabajadores. Las recientes noticias nos presentan un ejemplo más de esta realidad. Por un lado, narcotraficantes de alto calibre entran a la Asamblea legislativa por la puerta grande y se dedican a hacer lobby con los diputados para beneficiar sus negocios y lavar dinero. Por el otro, se reafirma la condena contra el abogado Mario Cerdas, quien fuera detenido por cultivar plantas de marihuana y posteriormente acusado de distribución. Ante esto, las cárceles están llenas de jóvenes de barrios pobres víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”.

Narcos en Cuesta de Moras

En los últimos días trascendió que 13 diputados y exdiputados recibieron 30 visitas de personas vinculadas a un grupo narco, involucrado en traslados de cocaína entre Colombia y Europa. Estas visitas tuvieron lugar los últimos 5 años e involucran a Ivonne Acuña y Zoila Volio (independientes), Cruickshank y Mileyde Alcarado (PRN), Óscar Cascante, Erwen Masís, Jhonny Leiva, Humberto Vargas y William Alvarado (PUSC), Olivier Jiménez (PLN), Natalia Díaz (ML) y Gerardo Vargas (FA).

Este escándalo se suma al ocurrido con el diputado del PLN Gustavo Viales, quien visitó casas de presuntos narcotraficantes. Además, se dio a conocer que su padre (alcalde de Corredores) y otros familiares que laboran en el Poder Judicial tenían nexos con el crimen organizado.

Pese a estar involucrados, congresistas como Viales y Volio llegaron al cinismo de pedir estar en las comisiones que estudian dichos casos en la Asamblea. No sería de extrañar tampoco que los proyectos de Ley para regularizar la producción de marihuana en el país sean un guiño a estos grupos narco, o bien una forma de legitimar sus negocios y de obligar al Estado a comprarles su producto. Cabe destacar que ninguna propuesta de Ley que se discute viene incluido el auto cultivo o la marihuana con fines recreativos.

Presos por cultivar

Mientras tanto, del abogado Mario Cerdas no existen evidencias de que haya vendido marihuana, ni que se haya enriquecido mediante su producción; en realidad, descontará 8 años por sembrar y regalarle marihuana a sus amistades. La condena se mantiene, aunque las pruebas hayan sido recabadas de forma ilegal en un allanamiento sin orden de un juez. Es un castigo ejemplificante para que todos los consumidores de marihuana en el país desistan de cultivar para su propio consumo; en cambio, deberán comprarla a un “narcopeón” o distribuidor. Inclusive sería menor o nula la pena si fuera atrapado adquiriendo la marihuana que cultivando, que la posesión de esta droga en el país está despenalizada.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el imputado atraviesa un proceso legal por este tema. Desde 2013 ha enfrentado 6 detenciones. En 2016 fue declarado inocente y sentó un precedente importante para el autocultivo en el país. Las autoridades judiciales se ensañaron contra el abogado para obtener una condena. Fue así como se desarrolló el segundo juicio donde además de posesión fue acusado de distribuir marihuana.

La verdadera cara de la guerra contra el narco

Además, el encarcelamiento de personas debido al narcotráfico también tiene cara de pobreza. Mientras los cabecillas de los carteles y grupos narcos gozan de libertad y del favor de los grandes políticos, los encargados de la distribución, de la venta y el menudeo son encarcelados.

Estas personas son en general jóvenes de barrios populares, quienes, ante la falta de oportunidades de trabajo y estudio, optan por una forma rápida de ganar dinero. Proporcionalmente son arrestadas más mujeres que hombres por situaciones vinculadas a las drogas. Son ellos y ellas quienes llenan las prisiones y mueren en las disputas por territorios; es una guerra contra los pobres, ya que los que en verdad se enriquecen por la venta de drogas no llegan a la cárcel.

Nos posicionamos en contra de la encarcelación de Mario Cerdas y exigimos su liberación. Este tipo de condenas refuerzan el monopolio que tiene el narcotráfico para cultivar y vender marihuana. Defendemos la liberación de las drogas, incluida la marihuana con fines recreativos y medicinales. Esto debe estar acompañado de campañas de educación y concientización respecto al uso de las mismas. Este es el primer paso para desarticular el narcotráfico, quitarle su monopolio sobre el cultivo y la comercialización.

Nos pronunciamos por la libertad de todas las personas presas por cultivar, vender, poseer o utilizar marihuana y cárcel para todos los políticos vinculados al narco y los líderes de estos grupos criminales. Finalmente, proponemos la expropiación de todos los bienes en posesión de narcotraficantes para ponerlos al servicio de la sociedad.

Nacionales

¡Contra la reforma al IVM!



La clase trabajadora en el país viene enfrentando cada vez más ataques de parte del Gobierno y otras instituciones del Estado. Ya se aprobó un combo fiscal que encareció la vida y significó el empobrecimiento de la población. A eso se le suma el proyecto de Ley de Empleo Público que ataca a los trabajadores de ese sector. Ahora son las pensiones las que están en la mira.

¿Qué pretenden?

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) discute una reforma al régimen de pensiones por Invalidez, Vejez o Muerte (IVM). Con esta) la CCSS pretende darle un aire al sistema de pensiones. Los principales cambios que se han dado a conocer son: fijar la pensión en 65 años, sin posibilidad del retiro adelantado. Por otro lado, se cambia la forma en que se calcula la pensión, aumentando las contribuciones, pero se disminuye el monto de las pensiones.

Como es usual estas discusiones que van a afectar a toda la clase trabajadora, son tomadas a la carrera por un pequeño grupo de dirigentes de la caja. Ante esta antidemocrática decisión la Defensoría de los Habitantes se manifestó por que se diera un proceso de consulta popular y las propuestas de reforma se hagan públicas. Aún así el tiempo es poco, las autoridades de la caja pretenden tomar una decisión en los próximos dos meses.

Trabajar hasta una vejez de pobreza

Esta reforma viene a afectar a la clase trabajadora del país, (alrededor de un millón y medio de personas son parte de este régimen). Tras de que el IVM ya presenta una pensión insuficiente para las personas que la reciben, estos cambios vendrán a hacer que las personas deban trabajar más años antes de pensionarse y que la pensión que recibirán no sea suficiente para garantizar todas sus necesidades. Especialmente representa un retroceso para las mujeres, que hoy tienen el derecho a retirarse antes y lo perderán.

Además, no es un derecho al alcance de todos. Los grandes porcentajes de desempleo, informalidad y subempleo indican que hay un importante sector de la población que no está aportando cuotas. El régimen de IVM necesita una reforma, pero una que mejore la pensión que reciben cientos de miles de personas y garantice una vejez digna.

La pensión y la misma CCSS son una conquista del pueblo, obtenida mediante luchas. Es un derecho, es lo justo después de toda una vida de trabajo. Para las autoridades de la CCSS no hay problema en que la gente deba trabajar cada vez más para acceder a este derecho. Esta reforma beneficia al sector empresarial, ya que no pone sobre la mesa la necesidad de cobrar a los grandes deudores de la caja, incluyendo el mismo gobierno central. Tampoco plantea aumentar las cuotas patronales.

Un fortalecimiento real del IVM pasa por poner en regla a todas las empresas que no reportan a sus trabajadores o que adeudan plata al seguro social. Acabar con el desempleo y la informalidad, aumentar la cantidad de personas que aportan a este fondo solidario.

Desde el Partido de los Trabajadores nos oponemos a la reforma al IVM, creemos que sólo vendrá a aumentar la miseria y pobreza. Nos sumamos al llamado a enfrentar este ataque en las calles. Que no se metan con la pensión de un millón y medio de personas, por el derecho a una vejez digna.

Nacionales

Privatización de la salud: Caja plantea pago a hospitales privados durante emergencia sanitaria



La gerencia de la institución se reunió con grandes hospitales privados para valorar entrega de dinero público a cambio de que dichas empresas brinden atención durante pandemia.

La Gerencia de la CCSS mantuvo reuniones con representantes de hospitales privados como La Católica, CIMA, Clínica Bíblica y Metropolitano para entregarles dinero público a cambio de que brinden atención médica en estos centros. Esto se propuso en el marco en que se rebasó la capacidad de los servicios de hospitalización de la Caja por el aumento acelerado en el diagnóstico de casos de Covid-19.

El mismo gerente general de la Caja reconoció que están valorando la propuesta. “En la convocatoria los representantes legales ofrecieron disponibilidad de servicios hospitalarios NO COVID-19, con las facilidades y tarifas especiales del servicio ofrecido como parte de las alianzas público-privadas” expresó al Semanario Universidad.

Esto significa un aprovechamiento de la pandemia para seguir desfinanciando a la institución y además constituye un mecanismo de privatización de la entidad. Por más que intenten embellecerlo mediante el nombre de “alianza público-privada”, se permite a estos grandes consorcios médicos seguir lucrando en plena crisis por COVID-19.

La grandes clínicas y hospitales privados, el negocio de unos pocos

Mientras la Caja se debilita producto de brutales recortes y de los privilegios a los grandes empresarios, el lucro de los grandes hospitales privados lleva bastante tiempo en el país. Muestra de eso es que según la última Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos (2018), un 76.5% de los costarricenses encuestados admitieron el haber incurrido en gastos adicionales para acceder a servicios privados de atención.

¿Quiénes se benefician con esto? Pues los grandes consorcios médicos que han entrado con todo al negocio de la salud. Mientras que para 1980 existían en el país solo tres clínicas privadas de servicios ambulatorios, a partir de 1989 se crearon tres hospitales, y durante la última década la oferta privada se expandió y diversificó, e incluso se ubicó fuera del Valle Central.

Clínica Bíblica, Hospital Cima, Clínica Unibe, Hospital Metropolitano, Hospital Universal, Clínica Católica, entre otros, expresan parte de la gran expansión del sector mientras la Caja se debilita.

Recientemente la Clínica Bíblica y su red de hospitales privados anunció una inversión de más de 50 millones de dólares para los próximos años. En 2019 este mismo hospital realizó una inversión superior a \$15 millones en un parqueo de cuatro pisos para 640 automóviles, que puede doblar esta capacidad en un futuro. En el piso siete de este edificio construyó un helipuerto que puede recibir un máximo de tres aeronaves, tanto de día como de noche” equipo de lujo y capacidad logística de un negocio en pleno crecimiento que beneficia a unos pocos.

El interés de la salud privada en Costa Rica es notorio para los grandes burgueses locales y extranjeros, no es por casualidad que el multimillonario Francis Durman sea el principal ejecutivo del grupo empresarial Montecristo, del cual forma parte la Clínica Bíblica, y que un 12,5% de las acciones de dicho hospital esté en manos del conglomerado Sanford Health, de capital estadounidense.

Rechazo del pago a hospitales privados, ¡expropiación sin indemnización ya!

Desde el Partido de los Trabajadores rechazamos el pago a los hospitales privados para atender la pandemia. La salud no puede ser considerada un negocio en ningún momento, y mucho menos en la actualidad con el aumento de casos por COVID 19.

Nos pronunciamos totalmente en contra de las alianzas público privadas y de cualquier forma de privatización de la CCSS; no hay que darle ni un centavo de dinero público a los bolsillos de los burgueses que se han beneficiado con el debilitamiento de la salud pública a manos de la gran burguesía y sus gobiernos neoliberales.

Estamos en una emergencia sanitaria, de ahí que se necesite aplicar medidas tajantes para preservar la vida del pueblo trabajadora. Por eso es necesaria la expropiación sin indemnización de las grandes clínicas y hospitales privados para poner a disposición toda su infraestructura y recurso humano al servicio el combate a la pandemia.

Nacionales

Retraso en obras de ruta 32 muestra fracaso de concesión de obra pública



Nota: Esta nota fue escrita antes de los allanamientos al Conavi, MOPT, Casa Presidencial y empresas constructoras el pasado 14 de junio.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) otorgó un plazo adicional de 421 días a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC por sus siglas en inglés) encargada de la ampliación de la ruta 32. Esta medida se toma luego de que las obras entre Río Frío y Limón muestran apenas un 37% de avance.

Se trata de la segunda ampliación del plazo otorgada a la cuestionada empresa asiática. Dicha transnacional ya había pedido una prórroga de 400 días ante la imposibilidad de cumplir con la promesa original de terminar los trabajos en octubre de 2020, aunque en esa oportunidad Conavi solo le otorgó 174.

La compañía oriental descaradamente expresó en múltiples ocasiones que los atrasos se deben a las constantes lluvias en la región, la huelga de 2018 y ahora le agregan la excusa de la situación sanitaria provocada por la pandemia.

En un principio, este proyecto comenzó su etapa constructiva en noviembre de 2017 con un costo de 465 millones de dólares. Este incluye la ampliación de los 107 kilómetros de la vía a cuatro carriles, la construcción de 33 puentes nuevos y la rehabilitación de los existentes, así como 13 pasos a desnivel y cinco intercambios.

Las constantes prórrogas con las que se ha beneficiado CHEC obedecen al mecanismo de concesión de obra pública el cual, entre otros aspectos, impide establecer multas por atrasos. Esto demuestra el total sometimiento del país a una legislación hecha a imagen y semejanza de las grandes empresas constructoras.

La concesión: un mecanismo de corrupción y saqueo

Sirva ese caso de ejemplo para referirnos al mecanismo privilegiado de los gobiernos para la construcción de aeropuertos, puertos y carreteras: la concesión de obra pública. Esta consiste en una desinversión del Estado en tal rubro, la cual pasa a manos privadas.

El gobierno de Alvarado ha tomado como una de sus banderas la construcción de autopistas, como por ejemplo a circunvalación en Guadalupe y quiere dar la imagen de que este gobierno ha hecho logros importantes en esta materia. Pero lo que no dicen es que estas obras muestran serias deficiencias en su construcción debido a la poca o casi nula supervisión de parte del CONAVI.

Muestra de ello es que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAME) de la Universidad de Costa Rica manifestó que buena parte de la infraestructura pública mostraba grietas importantes casi inmediatamente después de haber sido inauguradas.

Otro gran problema que muestran estas obras es que al final quienes las pagan son los trabajadores, por ello el gobierno anunció la creación de nuevos peajes en diferentes partes del país. Entonces, esas obras en apariencia monumentales, están hipotecando al país y llenando los bolsillos de las grandes constructoras.

¿A qué se debe esto? A que desde los años 80 este modelo de concesión ha sido impulsado por la burguesía de nuestro país como forma de financiar la obra pública. En todas las concesiones se pagan los servicios muy por encima de lo que realmente valen, generando enormes ganancias para las empresas a costillas del pueblo trabajador. La empresa de la ruta 27 recuperó más de la mitad de la inversión en solo 2 años y medio, teniendo 18\$ millones en ganancias más de lo esperado.

La concesión de obra pública favorece la corrupción, permitiendo que se haga un negocio privado con la obra pública y los servicios. Se hacen carteles “a la medida” para favorecer a ciertas empresas, como el caso de CASISA, empresa administrada por la esposa del viceministro del MOPT. Además, favorece los sobornos, como en el caso de Miguel Ángel, Figueres y Calderón, adonde las empresas sobornaban para lograr la adjudicación de un multimillonario contrato.

¡Abajo el modelo de concesión de obra pública!

La ampliación de la ruta 32 muestra una vez más el fracaso del modelo de concesión de obra pública. Este mecanismo hipoteca al país a cambio de trabajos inconclusos y mal hechos que termina pagando el pueblo trabajador.

Quienes se benefician son las grandes empresas como H Solís o en este caso CHEC. Las prórrogas a los contratos no implican ninguna sanción para las compañías, pero sí un mecanismo para obtener mayores ganancias.

Desde el Partido de los Trabajadores proponemos la anulación inmediata de la ampliación de la ruta 32 y de todas las concesiones de obra pública. El estado, bajo control de los trabajadores, es el que debe encargarse un plan de obras para crear puestos de trabajo estables y con condiciones decentes.

Juventud

Ante la negociación del FEES 2022: ¡Urge lucha y organización en las U públicas!



Por: Joel Oviedo - Juventud PT

Aunque las fechas oficiales de las negociaciones entre CONARE y Gobierno para el presupuesto universitario (FEES) del 2021 no han sido anunciadas aún, probablemente se realicen en junio o julio próximo. Desde la Juventud del PT consideramos que debemos enfrentar este nuevo proceso de negociación con una reflexión sobre los ataques que ha recibido el presupuesto universitario en los últimos 3 años de gobierno del PAC.

Desde el 2018, el crecimiento interanual del FEES ha ido bajando gradualmente: del 2017 al 2018, el crecimiento fue de 3,70%; para 2018-2019 fue menor con un 0,98% (provocado principalmente por un recorte de 10 mil millones de colones hecho desde la Asamblea Legislativa); para 2019-2020 fue de 2,32% (lo cual indicaría una mejoría respecto al de 2018-2019, aunque si el recorte antes mencionado no hubiese ocurrido, el crecimiento hubiera sido de 0,32%); para 2020-2021 fue de 0,60% (aunque, en la práctica, durante el primer semestre se ha operado con un crecimiento de -4.42%, dado que el Gobierno y CONARE acordaron que un 5% del FEES se depositaría “después” del I ciclo lectivo, a través de un presupuesto extraordinario). Por otro lado, el FEES también ha decrecido por la vía del pago del I.V.A (aprobado en el 2018), y aunque el Gobierno había prometido devolver el monto correspondiente, eso no ha sucedido [1].

Todo lo anterior evidencia una clara tendencia al desfinanciamiento de la U Públicas, que, por la naturaleza de sus actividades, requiere de un crecimiento presupuestario real y no nominal para cumplir con sus objetivos institucionales. Y el crecimiento desde el 2018, ha sido meramente nominal (no real), porque los aumentos interanuales en este periodo nunca han superado o igualado el crecimiento interanual de la inflación.

Este desfinanciamiento ha sido impulsado principalmente desde el Gobierno y la Asamblea Legislativa, dado que, en esos poderes, hay fuertes intereses en dismantelar la Educación Superior Pública (para favorecer a las U Privadas) y en restarle peso político a las U Públicas.

Asimismo, también han buscado eliminar la autonomía financiera universitaria para tener un control directo en el uso del presupuesto universitario, algo que han tratado de hacer (sin éxito) con acciones administrativas arbitrarias así como con intentos legislativos de reforma constitucional.

Por su cuenta, las distintas rectorías (reunidas en CONARE) y federaciones estudiantiles se han prestado para legitimar y ocultar el desfinanciamiento. Desde el 2019, el CONARE y las representaciones estudiantiles han salido a decir que no hay recortes, que se está cumpliendo la constitución política porque hay “crecimiento” (aunque no dicen que no es real), y que se está garantizado el desarrollo de sus actividades sustantivas (en la UCR, docencia, investigación y acción social) y el compromiso de no afectar las becas estudiantiles [2] [3].

Todo esto ha sido mentira, porque sí han habido recortes (que se camuflan con “compromisos” de que se repondrán luego) y las actividades sustantivas (al menos en la UCR) sí se han visto afectadas con reducciones en sus presupuestos, despidos y eliminación de horas estudiante y asistente. A esto se suma el recorte aplicado a las becas en la UCR a inicios del primer semestre del 2021 y el agravamiento en la faltante de cupos en los cursos.

Entonces, ante la próxima negociación del FEES, el Movimiento Estudiantil deberá ser consciente de lo que ha ocurrido en los años anteriores para evitar que vuelva a suceder. Por esto, debemos exigir: que esta negociación sea debatida entre las bases estudiantiles y funcionarios de las U Públicas, no sólo entre el Gobierno y CONARE; un crecimiento real del FEES; y una negociación quinquenal que permita a las universidades planificar a mediano plazo según sus objetivos.

Hacemos un llamado al Movimiento Estudiantil a organizarse y a prepararse de cara a esta nueva lucha en defensa de la Educación y a confiar sólo en sus fuerzas en alianza con el movimiento social costarricense.

¡Por un crecimiento real en el FEES 2022!

¡Negociación quinquenal del FEES ya!

¡Luchemos por más del 1,5% del PIB para la Educación Superior Pública!

¡Organización y lucha del Movimiento Estudiantil de cara a las negociaciones!

¡Organicemos nuestra Rebeldía!

Referencias

[1,2] ¿Crece realmente el FEES?, por José Ángel Vargas. En Semanario Universidad, 30 jul 2019.

[3] Gobierno y CONARE acuerdan FEES 2021 con reducción inicial de 5%, por Monserrath Cordero. En Semanario Universidad, 14 ago 2020.

Internacionales

¡Repudio a la visita de Blinken! Alto al saqueo imperialista, al acaparamiento de vacunas y la masacre al pueblo palestino



Este 1 de junio el gobierno recibió al secretario de Estado de EEUU Antony Blinken, en la primera visita de un emisario del gobierno Biden a Costa Rica. Esta ha generado cierta expectativa luego de la derrota de Trump y por lo que representa siempre el rol del imperialismo yanqui en la región centroamericana.

El funcionario de la Casa Blanca se reunirá con el canciller Rodolfo Solano y el presidente Alvarado para tratar “temas relacionados con el estado de la región, cooperación y atracción de inversión extranjera”^[1].

Las reuniones se dan en un contexto de crisis sanitaria que atraviesa el país aquejado por el coronavirus. Es decir, por la política asesina de apertura total del gobierno y de sometimiento a los dictados del imperialismo en relación con la lenta vacunación, producto del acaparamiento de las vacunas por parte de las grandes potencias.

Para el imperialismo estadounidense, este lobby político es muy importante justamente por estar en los primeros meses de mandato de un gobierno que se proyecta en el mundo como “el nuevo rostro” del imperialismo. Sin embargo, en estos momentos apadrina una nueva masacre contra el pueblo palestino perpetrada por el estado nazi sionista de Israel.

¿Cuáles son los verdaderos objetivos de esta visita?

En materia económica, por ejemplo, cuando se habla de inversión extranjera, se busca fortalecer el carácter de semicolonias sometidas a los dictados del imperialismo. Es decir, se pretende garantizar los privilegios de las empresas en régimen de zonas francas y con ello generar las mejores condiciones a las empresas extranjeras que se llevan toda la tajada del pastel, a costa de la explotación de la clase trabajadora en las fábricas y las plantaciones.

Otro puntal importante es consolidar al gobierno de Alvarado como socio en su política migratoria. Tal como sucede con el gobierno costarricense cuando aplica la mano dura contra los nicaragüenses, la línea del imperialismo gringo es seguir con la política de “cero tolerancia” ante las caravanas migrantes, de ahí que reafirme como fiel lacayo de esta orientación.

En realidad, la migración a Estados Unidos son consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales en toda Centroamérica, con mayor brutalidad en el triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Se trata de políticas basadas en la entrega de los recursos naturales y de sectores claves de la economía al capital privado transnacional; consiste en brutales recortes a los presupuestos públicos en materia de salud, vivienda, educación y privatización de instituciones del Estado. Todo esto va de la mano con la llamada “flexibilidad laboral”, que no es otra cosa que serias limitaciones a la libertad de organización, y un retroceso histórico en materia de conquistas laborales.

La agenda imperialista va de la mano con el fortalecimiento de los aparatos militares, policiales y de inteligencia; estos, con el pretexto del combate al narcotráfico, buscan reprimir cualquier forma de protesta hasta el grado de perseguir y asesinar dirigentes sociales.

Entonces, estamos ante el fenómeno de una migración forzada, donde miles de centroamericanos huyen de la miseria y la violencia causada por el saqueo imperialista. La política del gobierno de Biden es seguir este recetario neoliberal con más ataques a las condiciones de vida del pueblo trabajador, lo cual va a generar más caravanas migrantes en busca del “sueño americano” y por ende mayor represión.

Quienes llegan a territorio estadounidense son víctimas de la xenofobia, la superexplotación y las deportaciones masivas del gobierno gringo. De esta manera se crea un círculo permanente de pobreza y barbarie capitalista que beneficia a sus megacorporaciones.

La presencia de Blinken significa reafirmar el rol dirigente del imperialismo en el país y en la región, además de reafirmar el sometimiento de las clases dirigentes del país con los objetivos imperialistas.

Un gobierno sometido a la política imperialista de acaparamiento de vacunas

En materia de la crisis sanitaria, el país está sometido, por un lado, a severos recortes al presupuesto en este rubro. Pero además existe una severa crisis en las finanzas para atender la pandemia debido a que las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, aprovechan sus privilegios para evadir el pago de la seguridad social.

Esto sin duda repercute en el manejo que ha hecho el gobierno de privilegiar las ganancias por encima de la vida de la población. El ministro de Salud Daniel Salas, en comparecencia ante los diputados, se limitó a decir que no pueden hacer nada para acelerar la vacunación porque 10 de los países más ricos del mundo acaparan el 80% de la producción de vacunas.

La posición del ministro es una muestra más del sometimiento a la política de las potencias imperialistas de adueñarse de las vacunas. No debemos esperar del gobierno una postura beligerante por la liberación de las patentes, ni mucho menos una exigencia a las potencias para enviar más vacunas. Si algo ha demostrado esta pandemia es que Costa Rica es una colonia y que nuestras clases dirigentes no hacen otra cosa que cumplir las órdenes del imperialismo.

¡Repudio total a la presencia de Blinken en el país!

Por eso, desde el Partido de los Trabajadores repudiamos la presencia de Blinken en el país. El secretario de Estado, bajo mandato expreso de Biden, viene a ratificar los compromisos con la clase política criolla que de forma obediente siempre los ha cumplido.

Si bajo el mandato del ultrareaccionario de Trump se comportó como el garante de sus intereses en la región, no debemos esperar algo distinto. Resulta evidente seguirá honrando los compromisos adquiridos para seguir siendo una semicolonias, para explotar más a la clase trabajadora y proteger las ganancias de las transnacionales.

El gobierno de Alvarado busca mostrarse fiel a la política de acaparamiento de vacunas y de esta manera se vuelve un cómplice de las muertes por COVID, al mostrar acuerdo en convertir la salud en un negocio.

Los sectores populares debemos alzar nuestra voz en contra de la injerencia del imperialismo en la región, ese mismo que hoy es responsable de la masacre al pueblo palestino a manos del estado fascista de Israel, armado hasta los dientes con financiamiento gringo para garantizar sus intereses en Medio Oriente.

Referencias

[1] Antony Blinken llegará a Costa Rica este martes, se reunirá con el Presidente y el Canciller. En Columbia, 31 may 2021.

Internacionales

Nicaragua: ¿Es posible quitar a Ortega mediante elecciones?



A tan solo 5 meses de las próximas elecciones generales en Nicaragua donde se elegiría el presidente y las diputaciones de la asamblea nacional, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a dar un zarpazo las aspiraciones democráticas, esta vez con la persecución y encarcelamiento de varias furas que se iban a postular como una alternativa política al FSLN en las elecciones de noviembre.

Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro fueron las figuras políticas y posibles aspirantes políticos que el régimen detuvo en los últimos días, pero que solo se suman a un proceso de persecución de opositores que incluye a activistas sociales y periodistas alternativos, también destaca la persecución del reconocido escritor Sergio Ramírez, todo a la luz de una ley aprobada el año anterior que legaliza la represión política en Nicaragua.

La llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación” está siendo usada contra esos personajes, usando calificativos como golpismo y terrorismo para limitar la participación política y la libertad de quienes buscan asentarse en la oposición política al régimen.

Esas acciones recientes se suman a la interminable lista de acciones violatorias a los derechos humanos y a los principios más elementales de la democracia que el régimen Ortega-Murillo ha ejecutado en los últimos años, principalmente desde la insurrección de abril de 2018.

La dictadura se niega a caer

No hay duda de que el 18 de abril de 2018 marcó la historia reciente de Nicaragua, en ese momento las masas de jóvenes y trabajadores en todo el país salieron a reclamar al gobierno de Daniel Ortega la no aprobación de una contra reforma en el sistema de pensiones, pero con el pasar de los días las protestas llevaron a querer una transformación más profunda, la lucha por una nueva Nicaragua.

Desgraciadamente conforme pasaron las jornadas de lucha, el régimen Ortega Murillo le dio una demostración de poder dictatorial al planeta entero, ya que puso en marcha un esfuerzo represivo muy pocas veces visto desde las dictaduras militares de los años 70s y 80s, que dejó un estado final de cosas realmente catastrófico.

Tan solo en los primeros tres meses de protestas ya se contaban 300 de los 400 muertos totales de la represión, la inmensa mayoría del lado de las protestas, hombres y mujeres jóvenes que fueron asesinados casi siempre desde manos de policías y militares vestidos de civil o directamente en la represión de las movilizaciones; a esos números hay que sumare miles de personas heridas, mas de 1000 presos y presas políticas y más de 100 000 personas desplazadas que hoy son exiliadas políticas en todo el mundo.

Pese a la heroica gesta del pueblo nicaragüense que se mantuvo en las calles por más de 9 meses, y que sigue luchando hasta el día de hoy, la Dictadura se mantuvo sólida en el poder, sin importar las reacciones aisladas de la “comunidad internacional” y de los números finales de la represión conocidos por todo el mundo.

La presión directa de las personas que están aspirando a las elecciones de 2021 no son aisladas de las de los años anteriores, y pareciera que la dictadura no está dispuesta a someterse a un proceso electoral que controla plenamente, pero que podría mostrar un desgaste importante y abrirle una nueva crisis.

Un debate con nuestras amigas y amigos nicaragüenses

En los últimos meses miles de luchadores y luchadoras nicaragüenses migrantes y exiliados políticos han estado debatiendo sobre la necesidad de una coalición electoral para derrotar al FSLN y sobre el perfil de las figuras políticas que deben encabezar las casillas electorales de oposición, pero desgraciadamente no se tomó en cuenta que es imposible derrotar una dictadura como la nicaragüense por la vía electoral.

Todo ese debate se dio sin pensar en que Ortega iba a destruir la oposición electoral incluso antes de iniciar el proceso electoral, debe tomarse en cuenta que es la propia dictadura quien maneja el Consejo Superior Electoral, pero que además maneja el poder Judicial, el Legislativo y las fuerza armadas, pero que además maneja la mayoría de los medios de comunicación y eso hace que sea un aparato sólido, que no va a permitir que se cambie el gobierno.

Para un régimen que persiguió, torturó y mató a su pueblo sin problema en el pasado, entorpecer unas elecciones es una cosa menor.

Hay que tener claro que tanto el imperialismo internacional como el gran empresariado nicaragüense se siente feliz con la dictadura, ya que le garantiza el éxito económico de la producción capitalista en las mejores condiciones fiscales y logísticas, por eso la tarea de la derrota de la dictadura tiene carácter de clase.

En este punto, queremos dejar claro que quienes militamos en el Partido de los Trabajadores repudiamos las acciones de represión contra los partidos y candidatos, exigimos no solo su libertad personal y plenos derechos políticos, si no que además defendemos su derecho a participar en las elecciones, aunque somos conscientes de que no representan los intereses de las grandes masas de trabajadores y campesinos nicaragüenses.

Al igual que durante las jornadas de lucha del año 2018, donde las y los militantes de la LIT nos pusimos al frente de la solidaridad internacional de la revolución, opinamos que la dictadura solo va a caer cuando el pueblo pueda romper ese gran aparato de represión por medio de la lucha popular y la unidad de todos los sectores trabajadores, campesinos, indígenas y de la juventud.

Hoy mas que nunca urgen en Nicaragua la construcción de un gran partido obrero, socialista y revolucionario, que logre organizar una segunda insurrección popular, donde la clase obrera logre construir una gran huelga general indefinida, y que busque la destrucción de las fuerzas policiales y represivas, y que a penas caiga la dictadura, inicie la construcción de una Nicaragua para los trabajadores y los pobres.